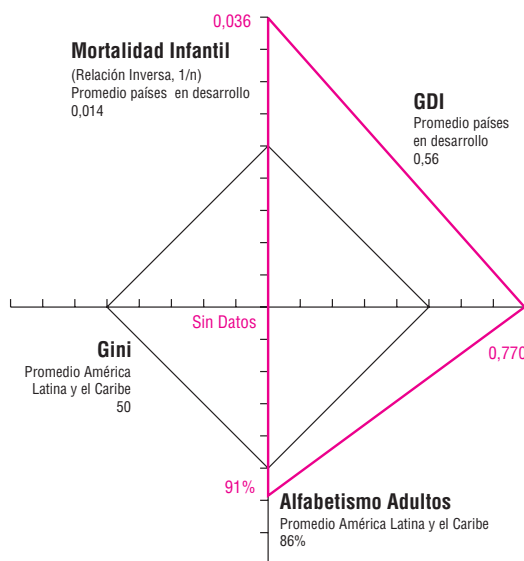


• SILVIO HERNÁNDEZ

DEL DICHO AL HECHO



El Diamante de la Equidad: Valores nacionales en terracota comparados con los regionales en azul.

Pese a que un informe elaborado en conjunto por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el ministerio de Planificación y Política Económica reveló que el porcentaje de pobreza disminuyó este año 3% respecto a 1990 (cuando alcanzaba el 50% de la población) la pobreza en Panamá tiende a convertirse en un mal endémico, mientras arrecian las críticas de sectores de la sociedad civil que acusan al gobierno de no mostrar voluntad política para revertir la situación.

El documento señala también que persisten grandes diferencias entre las áreas urbanas y las rurales, donde la pobreza azota con mayor rigor.

Mientras que 29% de las familias urbanas se encuentran bajo la línea de pobreza absoluta, en el área rural y en las reservas indígenas el guarismo trepa a 64%.

Una de las principales causas de la pobreza rural es la desigual distribución de la tierra, ya que 47% de los establecimientos agropecuarios poseen menos de una hectárea de extensión y sólo controlan 0,5% de la superficie explotada.

El secretario técnico del Gabinete Social, Guillermo Castro, reconoció que las causas del alto índice de pobreza son consecuencia del agotamiento del modelo protector de desarrollo implantado en la década de 1950 y de «la acentuada inequidad en la distribución del ingreso».

Panamá está ubicada en el penúltimo lugar de América Latina en materia de distribución de su riqueza.

Castro explicó que el aumento súbito de la pobreza a inicios de esta década, cuando saltó de 40 a 50%, fue «una combinación de las consecuencias del ajuste estructural con una agresión económica y militar (extranjera) en el marco de un gran caos político en el país».

El funcionario se refería a las sanciones económicas que impuso en 1988 el gobierno de Estados Unidos contra Panamá, que provocaron una caída de 16,1% en el Producto Interno Bruto (PIB), y la posterior invasión lanzada por Washington el 20 de diciembre de 1989 para derrocar al general Manuel Noriega.

Tras señalar que la peor etapa de la crisis ya había sido superada, Castro aclaró, sin embargo, que no era por el éxito del actual gobierno en la lucha contra la pobreza, sino porque se ha regresado a la norma «en una situación de transición en el proceso de ajuste estructural».

Advirtió que si el país funciona normalmente, sin crisis «y se inserta en la economía global hacia donde se orienta el actual programa de gobierno, vamos a estabilizar la pobreza en 30% en muy pocos años».

Subrayó que el gobierno puso en marcha hace tres años un programa «de mitigación de la pobreza» a través de proyectos de autoayuda realizados por el Fondo de Emergencia Social y el Gabinete Social, que está integrado por siete ministerios y varias entidades autónomas y semiautónomas del Estado.

Durante esos tres años se destinó alrededor de 45% de los recursos del gasto público total para ese programa, lo cual equivale a 27% del PIB, que suma unos 7.500 millones de dólares anuales.

Junto con ello «ha habido una activa promoción de la concertación con fuerzas representativas de la sociedad civil» su-

brayó Castro, con miras a buscar mecanismos de integración de la sociedad.

Adelantó que con la reciente creación del ministerio de la Juventud, la Mujer y la Familia, *«el gobierno va a reforzar la lucha contra la desintegración y la pérdida de relaciones solidarias, que necesita el país para componer las actuales desigualdades sociales»*.

No obstante, admitió que los problemas políticos que genera la pobreza, como la marginación de la producción, falta de participación ciudadana y el alejamiento de la vida política *«no lo estamos enfrentando en toda su dimensión en América Latina»*.

«Lo único que hemos hecho es inventar el discurso sobre la gobernabilidad, pero nos resistimos a entrar en el tema de la ciudadanía que es clave para resolver el problema de la pobreza», acotó.

Portavoces de la sociedad civil consultados dijeron no tener grandes diferencias en cuanto a los índices de pobreza que maneja el gobierno, pero discrepan con Castro en cuanto al futuro de los pobres y su versión sobre la concertación.

La presidenta del Centro de Capacitación Social, Celia Sanjur, indicó que todas las medidas prometidas por el gobierno para mitigar el impacto del ajuste *«están por verse»* y que *«tampoco hay voluntad política para resolver el problema de la pobreza»*.

Pese a que su organización no ha realizado investigaciones propias sobre esta problemática, Sanjur dijo que hay un estancamiento en los salarios de los trabajadores y un aumento en el costo de la canasta básica de alimentos de más de un 10% con respecto a 1996.

Tras señalar que con el programa de ajustes implementado en 1994 *«nos hemos sometido al poder de la economía transnacional y al modelo neoliberal»*, advirtió que *«las cosas pueden empeorar cuando se consuma la privatización de los servicios públicos esenciales»*, como el agua potable y la electricidad.

Sanjur precisó que, pese a las promesas de concertación con la sociedad civil, no existe una política permanente de diálogo con las organizaciones no gubernamentales y cuando se hace *«no se asumen compromisos por parte del gobierno»*.

Alibel Pizarro, responsable de género del no gubernamental Centro de Estudios y Capacitación Social (Ceaspa), coincidió con Sanjur y dijo que los resultados en materia de reducción de la pobreza *«no se compaginan con el esfuerzo económico»* realizado, sobre todo por las mujeres, niños y ancianos.

Explicó que a pesar de esos esfuerzos sigue existiendo una gran discriminación económica contra la mujer. Mientras el salario mensual promedio está situado en 245 dólares, el de las mujeres sólo llega a 197 dólares. Una cuarta parte de los cerca de 500.000 hogares panameños, están regidos por una mujer.

Pizarro puso en duda que el nuevo Ministerio de la Juventud, la Mujer y la Familia vaya a tener los resultados que vaticina Castro, ya que *«el mismo se integró sin consulta alguna con la sociedad civil y sin un programa compartido por todos»*.

El directivo de Ceaspa, Jesús Alemancia, comentó que la gran diferencia entre Panamá y otros países de la región que han sufrido grandes sobresaltos sociales por la aplicación de ajustes económicos, *«es que nosotros llegamos tardíamente a ellos debido a la situación interna»*.

Al igual que Sanjur y Pizarro, sostuvo que la falta de voluntad política para concertar planes para reducir los índices de pobreza ha provocado *«una situación de desconfianza en la sociedad civil hacia el gobierno y los políticos»*.

- IPS Informe especial para Control Ciudadano.